
VENEZUELA, CERCANO Y DISTANTE

Director de la Investigación:
Adriana Mejía

Investigadores:
Luz Amparo Medina
Adriana Guerrero
Nubia Pérez
Estudiantes de la Facultad de
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
de la Universidad Externado de Colombia

Para Venezuela el petróleo ha sido una bendición pero también una perdición. La forma como se determinó la distribución de los recursos provenientes de su explotación, bajo parámetros populistas, condujo al país a adoptar un modelo rentista donde el Estado era el encargado de repartir entre la sociedad esta riqueza. Sin embargo, fue precisamente esa fórmula la que acostumbró a la gente a recibir mucho aportando poco en la construcción de una economía dependiente por entero del petróleo, cuyo precio se fijaba lejos de Venezuela.

Al mismo tiempo, la élite dirigente se encargó de utilizar el poder para asegurar privilegios y prebendas a partir de la enorme cantidad de recursos que manejaba. Todo ello bajo la mirada indiferente de la opinión pública que sólo se percató de las dimensiones de la corrupción cuando la época de las vacas gordas había llegado a su fin.

A pesar de que Venezuela enfrenta hoy la peor crisis económica, política y social de su historia, el país presenta la ventaja de contar con cuantiosos recursos naturales. Tiene las segundas reservas más grandes de petróleo del mundo, grandes



yacimientos de hierro y aluminio a la vez que constituye una potencia regional en hidroelectricidad; factores que le aseguran a cierto plazo excelentes perspectivas de desarrollo.

Pero para entender la situación actual del país deben revisarse con detenimiento su historia y sus características como nación. De ellas pueden derivarse algunas explicaciones de la realidad venezolana de finales de siglo.

A principios de siglo Venezuela, tal vez más que otros países latinoamericanos, mostraba una economía atrasada, dependiente y eminentemente agrícola, cuyos principales productos de exportación eran café, cacao y ganadería. Además la falta de integración del aparato productivo se reflejaba en que las unidades dedicadas a la producción de exportación, se hallaban aisladas entre sí y con respecto al resto de la economía y aparecían, así, como enclaves económicos.

La población venezolana alcanzaba dos millones de habitantes y era mayoritariamente rural. Existían poco más de 20.000 propietarios de tierra, 5 por ciento de los cuales concentraba más del 50 por ciento de las tierras. El trabajo recaía en campesinos que cultivaban tierras ajenas y pagaban rentas en trabajo y en especie; de manera que la fuerza de trabajo era parcialmente de ellos y en parte de los dueños de la tierra. El resto de la población estaba formada sobre todo por artesanos, comerciantes y empleados públicos.

En lo político, durante el primer tercio del siglo domina al país un gobierno de corte autoritario en cabeza del general Juan Vicente Gómez, quien se mantiene en el poder hasta 1935.



Desde la independencia hasta la llegada de Gómez al poder, Venezuela se vio enfrentada a continuas guerras civiles provocadas por la rivalidad entre caudillos regionales. Gómez fue el último de estos personajes, que ejercían una fuerte influencia local. Descolló por sus ideas centralistas, logró someter a los otros caudillos e impuso su autoridad en todo el país.

Además de terminar con el caudillismo, Gómez, de origen provincial andino, esbozó el ejército nacional y construyó una red de carreteras que permitió integrar las diferentes regiones del país y finiquitar los enclaves económicos tradicionales. Por ello, el poder del gobierno se vio fortalecido e impidió el éxito de insurrecciones o revoluciones, tan frecuentes en el siglo anterior. También en este período se liquidaron los residuos de los partidos liberal y conservador, que fueron los grandes gestores de las luchas políticas del siglo XIX. Sin embargo, la oposición estuvo en cabeza de algunos oficiales egresados de la escuela militar que, junto con intelectuales y estudiantes, conspiraron contra el dictador, quien ejerció el poder hasta su muerte en 1935. A pesar de haberse retirado del gobierno en varias ocasiones, conservó siempre, de manera prudente, el cargo de Comandante en Jefe del Ejército.

En materia de economía, fue un período de gran prosperidad. Si bien hasta 1914 dependió del crecimiento en las exportaciones de los productos agropecuarios tradicionales, en aquel año se inició la influencia cada vez mayor del petróleo en la economía y su participación en las exportaciones. Fue entonces cuando Venezuela perdió su carácter agrícola para convertirse en un país eminentemente minero. En esa época, la exploración y explotación de hidrocarburos se regía por el sistema de



concesiones; Gómez mantuvo excelentes relaciones con las empresas extranjeras cuyo apoyo resultó decisivo para la estabilidad del gobierno. Este fue uno de los períodos en los cuales las transnacionales petroleras disfrutaron de grandes privilegios, como el régimen de exención de impuestos de aduana, que les permitía importar sin restricciones desde maquinaria para la exploración y explotación de hidrocarburos, hasta bienes suntuarios. La participación de la sociedad civil se limitaba a proporcionar parte de la reducida fuerza de trabajo, directa o indirectamente vinculada a la explotación petrolera.

La estructura de tenencia de la tierra en ese período no sólo permaneció intacta, sino que Gómez se convirtió en el más grande latifundista de la época y aseguró, de paso, el apoyo de los terratenientes. También en Venezuela la nota dominante del latifundismo consistió en que la mayor parte de estas tierras permanecieron ociosas durante muchos años.

Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, se implantó un sistema electoral indirecto por medio del cual el Congreso de la República designa al Presidente. Así, el general Eleázar López Contreras, quien fuera ministro de Guerra y Marina de Gómez, asume el control provisional del gobierno. Posteriormente, en abril de 1936, es nombrado Presidente constitucional por el Congreso para un período que iría de 1936 a 1941. En estos años, después de tres décadas de dictadura, se da un despertar en la actividad política del pueblo. Partidos políticos nacientes, sindicatos y organizaciones estudiantiles fueron, entre otros, los grandes propulsores de reformas inaplazables en los campos político, económico y social. Al mismo tiempo, el gobierno de López Contreras debió enfrentar a los sectores más radicales



—conservadores y gomecistas— que buscaban mantener los privilegios obtenidos en el gobierno anterior. Para neutralizarlos, el Presidente acudió a la vez al apoyo popular y a medidas orientadas a congraciarse con los sectores conservadores, lo cual le dio a su gobierno un carácter vacilante.

El gobierno de López puede caracterizarse, en términos de Fuenmayor, como "heterogéneo". Según este autor, en esta administración "... coexistieron las fuerzas reaccionarias imperialistas, burguesas y latifundistas, con fuerzas liberales de la intelectualidad burguesa, en permanente lucha por el control del poder. El comunismo exacerbado y cierta complacencia con los intereses extranjeros, fueron características salientes del lopecismo, sobre todo en los primeros años"¹.

Aunque su posición frente a las petroleras extranjeras no fue tan laxa como la de Gómez, tampoco se destacó por la independencia. La medida más significativa a este respecto fue la reforma de la Ley de Hidrocarburos: si bien eliminó las exenciones aduaneras que favorecían a las petroleras, ésta cubría apenas los artículos producidos en el país, que para ese entonces eran realmente escasos. Sin embargo, en muchos casos durante este período las petroleras se beneficiaron de nuevas concesiones. En cuanto al problema de la tierra, el régimen latifundista permaneció incólume durante el gobierno de López.

El Congreso Nacional eligió al General Isaiás Medina Angarita, ministro de Guerra y candidato a la Presidencia,

¹ Juan Bautista Fuenmayor, *Veinte años de política*, Caracas, s. r., 1968.



apadrinado por López Contreras, para el periodo de 1941 a 1945. En el transcurso de su mandato se distanció tanto de López, como de los sectores gomecistas que aún quedaban en el gobierno. Acorde con los vientos que soplaban durante la segunda Guerra Mundial, su principal objetivo fue darle al régimen un carácter democrático, para fortalecer las incipientes instituciones –todavía en proceso de formación– y consolidar los diferentes sectores de la vida nacional. Las principales medidas en tal sentido fueron el reconocimiento de los derechos civiles de la población y garantías para el ejercicio de las libertades públicas, cuyo hecho estelar fue la legalización del partido social-demócrata Acción Democrática (AD) en 1941, que se convertiría en el principal partido de oposición. Así mismo, legalizó al Partido Comunista en 1944, poniendo fin a disposiciones heredadas del período gomecista que prohibían la existencia de partidos de clase.

Para tratar de legitimar su gobierno con el respaldo de un partido, Medina Angarita crea el Partido Demócrata Venezolano, apoyado principalmente por el sector oficialista, parte de la burguesía y un grupo de intelectuales y políticos que buscaban la consolidación del sistema democrático en Venezuela. Pero se avanza muy poco en la construcción de un auténtico sistema democrático que diera cabida a una oposición efectiva, acceso al poder de nuevas generaciones, y vigencia al voto directo y universal.

En el campo económico el hecho más relevante de la administración Medina fue la Reforma Petrolera de 1943. El espíritu de esta reforma se orientaba a lograr una más justa participación del Estado venezolano en la explotación del



petróleo, o que la refinación se llevara a cabo en el país y que la actividad representara una fuente de empleo más sólida para la población. En suma, se buscaba que también los venezolanos disfrutaran de los beneficios del petróleo que hasta ese momento estaban reservados exclusivamente a las compañías extranjeras. Las regalías petroleras que la Nación percibía estaban entre el 7.5 por ciento y el 16 por ciento, y la reforma las consolidó en el 16.33 por ciento. Al mismo tiempo, se incrementaron los gravámenes superficiales de exploración y explotación y se obligó a las petroleras a pagar los mismos impuestos que el resto de los contribuyentes, con lo cual se eliminaron los privilegios y quedaron sujetas al pago de aranceles y al impuesto sobre la renta. En términos fiscales, los ingresos presentaron un incremento considerable al pasar de 78 millones de bolívares en 1943 a 254 millones en 1944. Es decir que en un año los ingresos fiscales se triplicaron, aunque a ello también ayudó la implantación del Impuesto sobre la Renta. En esta administración se creó el Seguro Social Obligatorio y se realizaron varias obras urbanas en Caracas y en otras ciudades de provincia.

A finales de 1945 empieza a gestarse la crisis que pondría fin al gobierno de Medina Angarita. Desde el siglo anterior regía en Venezuela una especie de cooptación, en virtud de la cual el Presidente saliente proponía su candidato para sucederlo; por lo general, era éste el elegido por el Congreso. Cuando las elecciones para el periodo 1946-1951 se acercaban, se presentó el rompimiento político al interior del PDV. Desde tiempo atrás el partido venía dividiéndose en dos fracciones: una en torno al presidente Medina y otra que apoyaba la candidatura del expresidente López Contreras. Cuando Medina anunció su

respaldo a Angel Biaggini, su Ministro de Agricultura, la ruptura fue un hecho. Se inició un período de pugnas en el seno del Congreso, mientras que en el Ejército² y con aprobación de los principales dirigentes de AD³ –partido que contaba ya con amplio apoyo popular y representaba el principal grupo de oposición al gobierno– se empezaba a fraguar una asonada contra la administración de Medina.

El golpe militar se concretó el 18 de octubre de 1945 y se instauró una Junta Revolucionaria de Gobierno, compuesta por cuatro civiles de AD, dos oficiales del Ejército y un independiente. La Junta asumió el poder en forma provisional hasta el 15 de febrero de 1948 y fue presidida por Rómulo Betancourt. Hechos sobresalientes de este período fueron el desarrollo del movimiento sindical y la formación de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV), que se consolidaría como principal central de trabajadores del país. Fueron los trabajadores petroleros quienes lideraron desde el comienzo el movimiento sindical; en 1946 llevaron a cabo el primer contrato colectivo con las petroleras. Con todo, el aporte más representativo de la Junta fue la expedición de un Estatuto Electoral que contemplaba el voto directo, universal y secreto, y la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que convocaba a elecciones para el 27 de octubre de 1946. En estas elecciones participaron cuatro partidos políticos: AD y el Partido

² Estaban dirigidos por los mayores Mario Vargas, Marcos Pérez Jiménez y Carlos Delgado Chalbaud.

³ Entre ellos se encontraban Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto y Gonzalo Barrios.

Comunista, ya existentes; y dos nuevos, el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) de ideología social-cristiana y la Unión Republicana Democrática (URD), ambos formados después de los sucesos del 18 de octubre. El gran triunfador de las elecciones fue AD que resultó fortalecido por el apoyo brindado a los golpistas. De las 160 curules obtuvo 137, COPEI 18, la URD 2 y el PCV 2.

La nueva Constitución fue promulgada en julio de 1947. En ella se llamaba a elecciones presidenciales para diciembre de ese año, comicios en los que participaron todos los partidos a excepción de la URD; en ellas resultó ganador el escritor Rómulo Gallegos, de AD. No obstante, este primer Presidente elegido por voto popular sólo ejerció el poder por nueve meses, durante los cuales se gestó una insurrección encabezada por los militares que habían participado en el golpe contra Medina Angarita. El golpe obedeció fundamentalmente al sectarismo del gobierno y al desplazamiento de viejos dirigentes sobre el control de los asuntos públicos. En pleno despunte de la guerra fría, se discutió la posible participación en los hechos de las petroleras inglesas y norteamericanas, y hasta la del propio gobierno de Washington que consideraban a Betancourt, Gallegos y, en términos generales a AD, como comunistas camuflados. El alto mando militar encabezado por el mayor Marcos Pérez Jiménez ejecutó el golpe que derrocó a Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948.

Vale la pena destacar el papel que desde la muerte de Juan Vicente Gómez desempeñaron las Fuerzas Armadas en el proceso político venezolano. Después de tantos años de represión civil y a pesar del empuje de algunos movimientos civiles, ellas constituían la única organización estructurada del país.

Días antes, el Congreso había aprobado una nueva reforma al impuesto sobre la renta; se adoptó el reparto igualitario de las ganancias provenientes de la explotación del petróleo entre las petroleras y el Estado venezolano, más conocido como el *fifty fifty*.

La Junta Militar de Gobierno formada por los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbaud y Luis Felipe Llovera puso fin a los cambios políticos que el gobierno de AD impulsaba, disolvió este partido y al mismo Congreso en un ambiente siniestro de represión que culminó con el asesinato de Delgado Chalbaud el 13 de noviembre de 1950.

Se reestructura una Junta de Gobierno encabezada por Germán Suárez Flamerich, en la cual permanecían Pérez Jiménez como ministro de Defensa y Lloreda Páez como ministro de Relaciones Interiores. La Junta asumió el poder con la promesa de realizar elecciones para integrar una Asamblea Constituyente en la que participarían COPEI, la URD y un partido organizado por la Junta, el Frente Electoral Independiente (FEI). Las elecciones se realizaron el 30 de noviembre de 1952. Todo indica que el gran triunfador fue la URD. Mas la Junta de Gobierno no reconoció los resultados de las elecciones y entregó el mando a Pérez Jiménez en los primeros días del mes de diciembre.

Se iniciaba así la última dictadura en Venezuela, que se prolongaría hasta 1958. En estos años la población alcanza 6.7 millones de habitantes que se encuentran sobre todo en las áreas urbanas; pasan ellos de 36.5 por ciento en 1945 a 48.9 por

ciento del total de la población en 1957⁴. Este incremento en la población urbana puede atribuirse a la política de obras emprendida por el dictador, particularmente en el área metropolitana de Caracas, y cuyo telón de fondo era un aparato burocrático que se enriquecía ilícitamente con los recursos del Estado.

Desde ese momento comienza la utilización no programada ni organizada de los recursos provenientes del petróleo que, como veremos más adelante, en este período presentan un crecimiento sin precedentes. Si bien ellos sirvieron para impulsar las obras de infraestructura que un país subdesarrollado como Venezuela requería, nunca respondieron a planes de largo plazo que le aseguraran al país una estructura económica y social independiente de los ingresos petroleros. De hecho, parte de las obras realizadas con estos recursos fueron de carácter suntuario, mientras se descuidaban áreas como la salud y la educación. Por el contrario, ellos sembraron las raíces de la cultura facilista y de corrupción que hoy tanto aquejan al país.

El gobierno de Pérez Jiménez se caracterizó no sólo por sus grandes obras, sino también por el ejercicio de una represión desbocada, por la persecución a toda oposición, y por las medidas tomadas a favor de las compañías extranjeras de extracción tanto de petróleo, como de hierro. En efecto, entregó nuevas concesiones que representaron cerca de 820 mil hectáreas de las zonas petrolíferas más productivas del país.

⁴ Julio César Funes (Comp), *Cuando Venezuela perdió el rumbo*. Caracas, Ediciones Cavendes, 1992.

En este período el ingreso nacional crece a una tasa interanual del 13.1 por ciento y el ingreso per cápita se triplica al pasar de 897 bolívares en 1945 a 2.517 bolívares en 1957, equivalente a un crecimiento anual promedio de 9.0 por ciento⁵. Se evidencia también una agudización en la concentración de la riqueza; mientras que en 1945 el 5 por ciento de la población poseía el 50.32 por ciento del ingreso total, en 1957 este nivel se eleva al 67.44 por ciento, a la vez que el 50 por ciento de la población más pobre en 1945 recibía el 9.85 por ciento del ingreso total y en 1957 sólo alcanzaba al 6.22 por ciento.

Este incremento en el ingreso total de la Nación corresponde a un aumento en la producción de crudo, que en 1945 era de 323 millones de barriles y pasó a 1.014 millones en 1957; lo cual equivale a un crecimiento interanual del 10 por ciento. De la misma manera, el volumen de exportaciones de petróleo experimentó una ampliación al pasar de 318 millones de barriles en 1945 a 940 millones en 1957. A ello contribuyó el aumento en los precios del crudo que en 1945 se situaban en 1.05 dólares por barril y al finalizar 1957 alcanzaron los 2.59 dólares, como efecto del fin de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de reconstrucción de las potencias que se sustentó en la utilización del petróleo. La posterior crisis del Canal de Suez también ayudaría a elevar los precios internacionales del crudo.

Hacia mediados de 1957 empiezan a evidenciarse los efectos de la política de derroche adelantada por Pérez Jiménez, en un elevado déficit fiscal que afectó actividades del sector privado

⁵ *Ibidem* p. 33.

como la financiera, el comercio y la industria. Si en la primera fase de la administración Pérez fueron ellas grandes aliadas del gobierno, a esas alturas se mostraban ya en favor del derrocamiento.

Al mismo tiempo, los sectores políticos, sociales y militares de oposición empezaron a conspirar contra el gobierno. En un primer momento, el Partido Comunista y la URD crearon la Junta Patriótica con el fin de coordinar toda oposición a la dictadura. A ella se integraron después AD y el COPEL, constituyendo así un frente político común de oposición al régimen. Igualmente, la Iglesia manifestó, a través de monseñor Arias, su posición contraria al gobierno, actitud que una buena parte del ejército compartía.

Una circunstancia que favoreció el movimiento de insurrección fue que la Constitución promulgada en 1953 contemplaba la realización de elecciones presidenciales justo para esa época. Al finalizar 1957, Pérez Jiménez, consciente de los riesgos que unas elecciones libres acarrearían para su permanencia en el poder, se ingenió un plebiscito en el cual él sería el único ganador posible. Como era de esperarse, la consulta resultó un fraude. Se colmó la capacidad de tolerancia del pueblo venezolano y se desencadenaron los sucesos de enero de 1958 que pusieron fin al régimen de Pérez Jiménez: levantamiento militar el primer día del mes, y posteriormente una huelga general que se tornó insurreccional.

Se debe destacar la importancia que en los hechos tuvieron todos los sectores de la vida social venezolana. Desde los primeros días de enero de 1958, estudiantes, obreros,





profesionales, maestros e intelectuales, entre otros, se sumaron al movimiento contra el dictador. En la noche del 22 de enero la Marina de Guerra y la Guarnición de Caracas se pronunciaron contra el régimen, y Pérez Jiménez, viéndose desprovisto del apoyo de las Fuerzas Armadas, decidió huir hacia Santo Domingo.

Con la salida del dictador se instaura una Junta de Gobierno⁶ cuya principal tarea fue propiciar la transición hacia un régimen constitucional y democrático. Se le abona a la Junta una gestión de limpieza en la administración pública y en las Fuerzas Armadas, la legalización de los partidos que habían sido disueltos en la dictadura y el haber propiciado el regreso de los exiliados.

En el plano económico, reajustó el porcentaje de la renta petrolera elevándolo al 60 por ciento, pero tuvo que enfrentarse a serios problemas de desempleo causados por la interrupción de las obras de infraestructura que se adelantaban desde la administración anterior. La Junta coincidió con una recesión internacional y bajos precios del petróleo.

En estos años, en particular desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se inicia en Venezuela un proceso de inmigración principalmente de italianos, españoles, portugueses y alemanes que, atraídos por la riqueza petrolera del país, llegaron a

⁶ Formada por los militares que realizaron las acciones para la caída de Pérez Jiménez. Ellos eran: el comandante de la Marina Wolfgang Larrazábal quien la presidió y los coroneles Roberto Casanova, Abel Romero, Carlos Luis Araque y Pedro José Quevedo.



buscar nuevas oportunidades de trabajo. En años posteriores llegaría una nueva ola migratoria, esta vez proveniente de países latinoamericanos donde se instauraron dictaduras militares, como en los casos de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Todos estos inmigrantes formaron una oferta de trabajo bastante calificada, que ha hecho grandes aportes al país y ha logrado adaptarse a la cultura venezolana al punto de desarraigarse de la propia. Un caso especial lo constituye la afluencia masiva de colombianos a Venezuela, atraídos por el alto nivel de vida del vecino país, por las oportunidades de empleo que se percibían, y por la cercanía geográfica de las dos naciones.

En el intervalo entre la caída de Pérez Jiménez y las elecciones realizadas el 7 de diciembre de 1958, se produjo un distanciamiento entre los partidos que se habían unido para arrojar del poder al dictador. La ruptura se dio por la celebración en octubre del llamado "Pacto de Punto Fijo", en el cual participaron AD, URD y COPEI, excluyendo de entrada al Partido Comunista. En este pacto, que se asemeja a los acuerdos del Frente Nacional en Colombia, los partidos se comprometen a gobernar juntos, formando las fuerzas del sistema y marginando a las demás.

Los partidos participantes en el pacto se comprometían a poner fin a la violencia interpartidista, a consolidar el sistema democrático, a defender al gobierno que resultara de las elecciones de diciembre, y a adoptar una pauta de cultura política que consistía en la consulta de los actores sociales considerados fundamentales, "concediéndoles incluso el derecho al veto sobre las decisiones que afectaran sus intereses



vitales o esenciales, impidiendo así que el partido mayoritario impusiera su voluntad⁷. En un punto no pudieron ponerse de acuerdo y fue en la designación de un candidato único que se presentara a las elecciones en representación de los tres partidos; cada uno lanzó el suyo propio.

En los primeros comicios, realizados en diciembre mediante voto universal, directo y secreto para la elección de Presidente y cuerpos deliberantes, resultó vencedor el candidato de Acción Democrática Rómulo Betancourt, y su partido alcanzó también la mayoría de curules en el Congreso de la República.

Betancourt asumió la Presidencia en febrero de 1959. En concordancia con el Pacto de Punto Fijo, el Gabinete de Gobierno se configuró con miembros de los tres partidos; también de éste se excluyó al Partido Comunista. El hecho creó roces entre el Presidente y diversos sectores de la vida nacional y de su propio gobierno, particularmente con la URD, según la cual Betancourt desconocía los aportes del PCV en la lucha contra la dictadura al interior de la Unidad Nacional. Es de recordar que en un contexto de guerra fría y en presencia de las compañías petroleras internacionales, cualquier manifestación comunista se consideraba peligro inminente. Este factor podría explicar el sentido de las decisiones de Betancourt, un Presidente abocado a ganarse la confianza de las petroleras, de los gobiernos de los países de origen de las mismas, de los sectores de derecha del país, y de las Fuerzas Armadas.

⁷ Juan Carlos Rey, "La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación", en *Revista de Estudios Políticos*, N° 74, Caracas, octubre de 1991, p. 332.

Las políticas del Presidente provocaron también enfrentamientos en su partido, particularmente en las filas jóvenes de Acción Democrática, que consideraban que el gobierno resultaba temeroso frente a posibles reacciones de la derecha, y débil para dar respuestas concretas al desempleo y la reforma agraria, dos problemas medulares que debía enfrentar.

Por otra parte, al gobierno de Betancourt le correspondió enfrentar algunos alzamientos militares, aunque de carácter diferente a los que tradicionalmente se habían dado en Venezuela. Dentro de las Fuerzas Armadas se evidenció la existencia de sectores nostálgicos de la dictadura pero también de oficiales revolucionarios y nacionalistas influidos por ideas marxistas, que más tarde comandarían las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), la coordinadora guerrillera de Venezuela en la década de los sesenta. Pero no fueron sólo militares los que formaron parte del movimiento insurgente. Al mismo tiempo se integraron estudiantes y profesores del PCV, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) separado de Acción Democrática, y algunos sectores de la URD. Todos ellos influidos por la Revolución Cubana de Castro.

Otro hecho de gran trascendencia fue la expedición de una nueva Constitución cuya vigencia se extiende hasta hoy.

En los primeros años de la administración Betancourt, Venezuela se enfrentó a la primera crisis económica de la era democrática. Con la salida de Pérez Jiménez del poder, se presentó una caída en la inversión extranjera y una fuga masiva de capitales debido a la desconfianza en el sistema recién



instaurado, a la reducción de los precios y del mercado petrolero, a la contracción de la economía, a la amenaza inflacionaria y a la disminución de la liquidez bancaria. La primera medida que se tomó –a finales de 1960– para manejar el nivel de reservas internacionales fue el control de cambios, para evitar una fuerte devaluación.

Para enfrentarla, se implementó un paquete de medidas tendientes a recuperar el clima de prosperidad perdido y propiciar la inversión extranjera en algunos sectores. Se decidió implantar la utilización de planes imperativos para el sector público e indicativos para el sector privado. La idea del Gobierno era obtener el respaldo político incondicional de los dos mayores partidos (AD y COPEI). A partir de este momento, el Gobierno adopta el modelo de sustitución de importaciones como herramienta para la industrialización del país; y utiliza el sector de la construcción como jaloneador de la economía nacional con el fin de disminuir el desempleo, reducir y eliminar el déficit fiscal que en 1960 llegó a los 1.986 millones de bolívares, y restablecer el poder adquisitivo de la población. Para los dos sectores en pugna, esta cuestión, capaz de granjearse la adhesión popular, resultaba decisiva.

En materia petrolera se tomó la decisión de no otorgar más concesiones a las compañías extranjeras y se constituyó la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), como promotora de la exploración y la explotación nacional del crudo; en este período se impulsó la creación de la OPEP, siendo Venezuela uno de los líderes en el proceso.

Para 1963, último año de la administración Betancourt la crisis ya había sido superada. Se logró un crecimiento anual



promedio del Producto Territorial Bruto de 4.5 por ciento y el dólar se estabilizó en 4.30 bolívares. En enero de 1964 se eliminó el control de cambios, por considerarlo fuente de corrupción si se implantaba por un período superior al estrictamente necesario. Las industrias, fruto del proceso de sustitución de importaciones, crecían a una tasa del 8.5 por ciento anual, mientras que la agricultura lo hacía a niveles del 6 por ciento. La inflación en estos años se mantuvo a una tasa interanual de sólo 2 por ciento y se logró una mayor generación de empleo por parte del sector privado.

Lo más sobresaliente de este Gobierno es que, después de una profunda recesión, entregó un país con una economía saneada que devolvió la confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, y despertó en la población venezolana un sentimiento de optimismo frente al futuro. Este éxito sería decisivo en la derrota de la guerrilla, tras las sublevaciones de Puerto Cabello y Puerto Carúpano.

En lo económico, las dos administraciones posteriores, de Raúl Leoni y Rafael Caldera, mantuvieron las políticas adoptadas por Betancourt y una continuidad institucional. Los niveles de gasto e inversión públicos crecieron a tasas moderadas. En materia monetaria, el objetivo era alcanzar un crecimiento en la misma proporción que lo hicieran la producción y el ingreso, para evitar una inflación causada por el exceso de circulante. Característica de los tres primeros gobiernos democráticos fue, pues, la moderación en materia económica; ésta se rompería con la llegada de Carlos Andrés Pérez al poder en 1974.

A las elecciones de diciembre de 1963 concurrió un gran número de candidatos a la presidencia: hubo ocho aspirantes a



la máxima magistratura del país. En la contienda resultó vencedor Raúl Leoni de AD, seguido por el candidato Rafael Caldera de COPEL.

El Gobierno de Leoni es considerado como un mandato de "Amplia Base", por la participación que tuvieron partidos como la URD y el Frente Nacional Democrático, liderado por el escritor Arturo Uslar Pietri. Sin embargo, en este período se excluyó al COPEL del Gobierno y se convertiría en la principal fuerza de oposición. Un rasgo importante de esta época fue la proliferación de divisiones y coaliciones que se presentaron en los partidos. Trascendental fue la división de Acción Democrática a finales del Gobierno de Leoni, causada por la pugna entre Luis Beltrán Prieto y Gonzalo Barrios por la candidatura presidencial; el partido se escindió y surgió el Movimiento Electoral del Pueblo, en apoyo de Prieto. Ello favoreció, en últimas, el triunfo de Caldera en 1969.

En términos generales, se continuó con la política de la administración anterior para el manejo de la guerrilla. El Congreso aprobó la "Ley de Conmutación de Penas por Indulto o Extrañamiento del Territorio Nacional", gracias a la cual empezó a normalizarse la situación de muchos participantes civiles y militares en la lucha armada contra el Gobierno. A partir de 1967, se reintegraron a la vida legal las fuerzas que habían participado en la rebelión armada.

Los aspectos económicos más importantes de este Gobierno fueron el aumento de la participación del Estado en los beneficios petroleros al 70 por ciento, la implementación de una reforma tributaria y el ingreso de Venezuela a la ALALC en 1966,



medidas que profundizaban la difícil adopción del modelo cepalino iniciado en el gobierno de Betancourt.

Las elecciones de 1968 dieron el triunfo al socialcristiano Rafael Caldera y "señalaban ya el fenómeno de la alternativa bipartidista que confirmaría las elecciones de 1973"⁸. Era la primera vez que el partido de gobierno perdía las elecciones y subía al poder la oposición. Ideológicamente, Caldera gobernó bajo los principios socialcristianos que inspiran su partido.

El objetivo principal que el Presidente se trazó fue el de la pacificación del país en un clima de entendimiento y diálogo entre las diferentes tendencias políticas. Un resultado importante fue la reinserción del PCV. Por discrepancias ideológicas este partido se divide, y de él surge el Movimiento al Socialismo (MAS) en 1971, que se define como partido de izquierda de "nuevo tipo".

Durante el gobierno de Caldera se agudizó la polarización en torno a los dos mayores partidos, AD y COPEL. Al envejecer su líder, Jóvito Villalba, la URD perdió consistencia y la izquierda se atomizó: PCV, MAS, MIR.

En el plano económico el hecho más importante es que se sentaron las bases para la posterior nacionalización del petróleo mediante la expedición de dos leyes que le restaban poder a las compañías concesionarias extranjeras: la ley sobre bienes afectos

⁸ Ramón J. Velásquez, *Evolución política en Venezuela moderna*, Caracas, Monte Ávila Editores, 1976, p. 225

a reversión en las concesiones de hidrocarburos y la ley que reserva al Estado la industria del gas natural proveniente de los yacimientos de hidrocarburos. Estas medidas se recibieron con beneplácito en los diferentes sectores sociales y políticos, aunque a partir de ellas se desató la polémica sobre la conveniencia de la nacionalización del petróleo, pues en algunos sectores del país se sostenía que aún no estaban preparados para asumir esa responsabilidad. Para los venezolanos, el sistema de concesión había significado la expropiación de su recurso más importante con una participación insuficiente en las ganancias y siempre constituyó el pretexto para la intervención de intereses externos en los asuntos nacionales.

En este período empiezan a presentarse síntomas de inflación por causas internas y externas. Entre las primeras figura la incapacidad del aparato productivo para satisfacer la demanda interna y algunas prácticas monopólicas y especulativas que produjeron alzas en los precios. De otro lado, la inflación externa encareció los productos importados en un país donde el componente de bienes de consumo final proveniente del exterior es significativo. Otro hecho importante es que en el período el país fortalece su política de integración regional al ingresar al Pacto Andino en febrero de 1973.

Teniendo en cuenta que en Venezuela la votación es obligatoria, las elecciones de 1973 fueron unas de las más concurridas en la historia, registrándose una abstención de apenas 3 por ciento. En estos comicios resultó vencedor Carlos Andrés Pérez (CAP), candidato de AD, con el 48.7 por ciento de la votación, seguido por Lorenzo Fernández de COPEI con el 36.7 por ciento de los votos. Se consolida así la hegemonía

política de estos dos partidos. A partir de esta elección comienza la era de derroche y mala administración de la riqueza petrolera, agravada por la primera crisis petrolera. Aun cuando CAP había prometido "administrar la riqueza con criterio de escasez y frenar el consumismo y el dispendio"⁹, lo que sucedió en realidad fue bastante diferente. Al iniciar su Gobierno lo rodeaban condiciones políticas y económicas particularmente favorables: su partido tenía la mayoría de escaños en el Congreso y contaba con los recursos provenientes de la bonanza petrolera, originada en la cuadruplicación de los precios del crudo en los mercados internacionales.

Debido al apoyo de los países industrializados a Israel en la guerra del Yom Kippur, los países árabes productores de petróleo decretaron un embargo petrolero en octubre de 1973, y el precio de 5.11 dólares por barril que los productores habían fijado al comenzar la guerra, llegó a situarse en 20.00 dólares el barril.

Desde finales de la administración anterior se había propuesto la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela, que sería el encargado de invertir en el exterior y congelar el excedente de los ingresos petroleros. No obstante, dada la mayoría del partido de Gobierno en el Congreso, el Presidente solicitó y obtuvo la aprobación de una Ley Orgánica que lo autorizaba a expedir medidas extraordinarias en materia económica y financiera que le permitían legislar por decretos-leyes. Con estos poderes

⁹ Alberto Arias Amaro, *Historia Moderna y Contemporánea de Venezuela*, Caracas, Editorial Romot, 1982.

diseñó los lineamientos del V Plan de la Nación, el cual se orientaba al desarrollo de todos los sectores de la economía, en especial de las industrias básicas de Guayana. Sin embargo, ni en el Plan, ni en las acciones posteriores se tomaron medidas que respondieran a objetivos productivos de largo plazo; se adoptó en cambio una *distribución simple de los recursos* a través de mecanismos como subsidios en todos los aspectos de la vida social y económica de Venezuela. De esto se exceptúan el desarrollo hidroeléctrico (Guri), la creación de las industrias del hierro (SIDOR) y el aluminio. Se consolidaron las industrias y el sector financiero subsidiado que darían que hablar en los años siguientes.

He aquí dos hechos trascendentales del primer gobierno de CAP: las nacionalizaciones, del hierro en diciembre de 1974 y del petróleo en 1975; y con base en ello, la creación de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), empresa matriz propietaria de las compañías operadoras nacionales que sustituirían a todas las concesionarias extranjeras. Estas nacionalizaciones se negociaron con las multinacionales, que fueron indemnizadas con largueza a los pocos años de expiradas las concesiones.

En este periodo el país recibe 45 288 millones de dólares, por concepto de exportaciones petroleras, 3 veces lo recibido por el mismo concepto en la administración anterior. Contrario a los postulados iniciales del gobierno, "se destaca un proceso de despilfarro, de endeudamiento externo injustificado y de crecimiento insaciable de gasto público que lo lleva a un estado de desgravación moral y pérdida de valores éticos"¹⁰, de los

¹⁰ Funes, *op. cit.*, p. 79

cuales aún hoy adolece el vecino país, calificado a veces de Venezuela Saudita.

Desde esa administración, la corrupción empieza a generalizarse en el aparato estatal. Lo que pasa es que el pueblo, disfrutando de una prosperidad producto de los altos ingresos nacionales, o no se da cuenta de lo que sucede o no le importa porque tiene su parte. La situación se torna insostenible años después con la caída de los precios petroleros y las consecuentes dificultades económicas que hacen reaccionar al pueblo frente a los desmanes cometidos por sus dirigentes.

Sin embargo, en la contienda presidencial de 1978 el candidato copeyano Luis Herrera Campins, al final vencedor en la justa electoral, desarrolló una agresiva campaña en la cual cuestionaba la *destinación de los recursos*; al igual que su contendor Luis Piñerúa Ordaz, de AD, quien formuló severas críticas a la situación de descomposición en que se sumía el país. En estos comicios se acentuó la tendencia bipartidista de Venezuela, al reunir AD y COPEI el 90 por ciento del electorado.

La tendencia al alza de los precios del petróleo durante el Gobierno se vio favorecida por la segunda crisis a finales de los setenta, causada por la revolución fundamentalista musulmana en Irán en 1979; los precios internacionales del crudo llegaron a situarse en 28.00 dólares por barril en febrero de ese año, y en 29.71 dólares en 1981.

A causa de los extraordinarios ingresos, se presenta en Venezuela un sobredimensionamiento de la economía que, al remontar los valores anteriores al "boom", se vuelve altamente dependiente de los precios del petróleo. Cuando caen en la

primera mitad de la década de los ochenta, precipitan una crisis económica que adquiere características estructurales; y los problemas políticos que ella implica, tienden a empeorar.

En las presidencias de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins los ingresos del Estado se sitúan en niveles elevadísimos, llegando a sumar en todo el período 165.000 millones de dólares. Y no sólo en razón de los altos precios del petróleo, sino también por las exportaciones de las empresas estatales de hierro, acero y aluminio, y por los dineros que entraron por concepto de préstamos internacionales. No se explica entonces, cómo el país no aprovechó estos recursos para hacer inversiones productivas, tanto en el aparato industrial como en capital humano, que le permitieran diversificar su economía y hacerla menos dependiente del petróleo. Si bien el discurso lo preconizaba, el Estado y la sociedad se dedicaron en realidad al despilfarro, a la corrupción y a la depredación crecientes y generalizadas que condujeron al proceso de descomposición social y moral del país.

El incremento en las reservas internacionales llevó a un repunte inflacionario que elevó los precios a tasas del 11.75 por ciento anual, aumentando tres y medio veces con respecto a la inflación promedio de los años setenta (3.3 por ciento). Sin embargo, no fueron sólo causas monetarias las que engendraron esta situación. La oferta tampoco respondió de la manera esperada. Fue incapaz de satisfacer la demanda creciente y produjo un recalentamiento de la economía, agravado por el hecho de tener una moneda sobrevaluada frente al dólar.

En febrero de 1983 se produce el cierre del mercado cambiario en el famoso "viernes negro", cuando se toma la decisión de

devaluar; finaliza así la paridad que por más de 22 años tuvo el dólar con el bolívar, a 4.30, y se establece el régimen de cambios diferenciales (RECAD). Este permitía la existencia de tres tasas de cambio diferentes y que las deudas externas contraídas antes de esa fecha pudieran pagarse al cambio antes vigente. Esto fue provocado principalmente por dos razones: la caída de los ingresos petroleros y el peso de la deuda externa. En 1982 la OPEP decidió disminuir su nivel de producción y estableció cuotas a cada país productor para intentar revertir la tendencia a la baja en los precios internacionales del crudo. Venezuela redujo su producción en 78 millones de barriles respecto a 1981, con las implicaciones que ello tendría sobre los ingresos del Estado.

En 1983 el país debía 36.200 millones de dólares y no pudo cumplir con el pago principal y los intereses, siguiendo la tendencia de la región iniciada por México en 1982. Cuando los acreedores le exigieron aplicar el plan de ajuste necesario para iniciar el proceso de refinanciación, el país se encontraba en plena etapa electoral y el Gobierno no estaba dispuesto a enfrentar el costo político que significaba implantar un programa de corte neoliberal. Se decidió dejar el problema al Gobierno entrante, mientras el país perdía su acceso al mercado internacional de capitales.

Venezuela celebró nuevas elecciones presidenciales el 4 de diciembre de 1983, en las cuales resultó vencedor Jaime Lusinchi de AD con el 56.7 por ciento de la votación, frente al 34.5 por ciento alcanzado por su principal oponente, el expresidente Rafael Caldera, quien con las banderas socialcristianas de COPEI aspiraba alcanzar de nuevo la Presidencia de la República.

En este gobierno se agudizaron los síntomas de la crisis del modelo rentista que se implantó en Venezuela, donde, como lo afirma Enzo Del Búfalo, "la fuente de financiamiento inicial provenía de la renta petrolera y fue posible paliar los efectos perversos del modelo destinando buena parte de esa renta a apaciguar presiones sociales mediante subsidios a la población marginal. Los límites del modelo dependían de la disponibilidad de una renta suficiente para financiar las crecientes necesidades de recursos y cuando ésta dejó de ser suficiente, también aquí el modelo se agotó"¹¹.

Sin embargo, el gobierno dio largas a las reformas indispensables para corregir los desequilibrios económicos, y la crisis empeoró. Durante este período la inflación se disparó a un nivel promedio del 25 por ciento; a pesar de que los precios de la mayoría de los productos estaban controlados, hecho que generó al mismo tiempo profundas distorsiones al orientar la inversión privada hacia los sectores no controlados en detrimento de las actividades productivas esenciales, y una corrupción cada vez más generalizada. Este fenómeno se vio favorecido por el aumento del gasto público dedicado en menor cuantía a educación, salud y vivienda, mientras que la mayor parte de los recursos se destinaron a alimentar la burocracia del aparato gubernamental. La inflación externa también produjo efectos negativos sobre la economía venezolana. El incremento en los precios de los productos de consumo final, intermedio y de capital resultaba dramático en un país altamente dependiente

¹¹ Enzo Del Búfalo, "Responsabilidad social", en *Encuentro y Alternativas*, Caracas, (s. n.), 1994

de las importaciones para satisfacer los requerimientos de la demanda interna. Un síntoma del mal gobierno lo constituye la precariedad y la escasa confiabilidad del aparato estadístico nacional; a excepción de las cuentas nacionales del Banco Central.

En 1988, Carlos Andrés Pérez llega de nuevo a la presidencia de la República con el 52 por ciento de la votación, frente al 40 por ciento alcanzado por Eduardo Fernández, candidato de COPEI. El MAS, con un programa de socialismo democrático, Causa Radical (Causa R) - grupo emergente de carácter sindical contestatario- y otras de carácter ocasional, se convierten en fuerzas cuyas posiciones pasaron a ser decisivas por el equilibrio entre AD y COPEI en el congreso¹². En estas elecciones se registró el mayor nivel de abstención en la historia venezolana al alcanzar el 18 por ciento. El país no identificaba verdaderas propuestas y respuestas políticas frente a los problemas sociales y económicos que enfrentaban. Desde 1987 se presentaban continuas huelgas y manifestaciones de insubordinación civil de diverso tipo. Los diferentes movimientos de la sociedad civil intensificaron sus presiones para reformar el Estado y disminuir de este modo la colonización de los partidos políticos sobre la vida social. Pérez fue reelegido gracias al recuerdo del gobierno de vacas gordas que presidió en los setenta, cuando en el 89, serían los tiempos de vacas flacas.

Contrario a lo que había prometido en su campaña, días después de su posesión, Pérez anuncia un paquete de medidas

¹² Joaquín Marta Sosa, "Venezuela 1989-1994: cambios, elecciones y balas" en *Informe de Conjuntura y Política Económica*, Caracas, enero de 1993

de corte neoliberal enmarcado en lo que denominó "El Gran Viraje", cuyos instrumentos esenciales fueron: modificar el modelo intervencionista disminuyendo las regulaciones sobre precios, tasas de interés e inversión extranjera, y eliminando subsidios; adoptar un tipo de cambio único y flexible de libre convertibilidad; negociar la deuda externa dentro de una amplia gama de posibilidades; realizar ajustes al alza en las tarifas de los bienes y servicios de carácter público y particularmente de la gasolina; desarrollar un proceso de apertura económica e internacionalización; realizar una reforma tributaria, e iniciar un agresivo programa de privatización y reestructuración de los organismos públicos.

A primera vista eran cambios inaplazables que se requerían para sanear y ajustar la economía. Sin embargo, el gran error de Pérez fue iniciar el programa sin apoyo de las diferentes instancias políticas, económicas y sociales, confiando en la inmensa popularidad de que gozaba en los inicios de su mandato. El pueblo ya estaba indignado con los niveles de corrupción a los que había llegado la dirigencia del país y el resultado fueron los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, mejor conocidos como el "Caracazo". Miles de personas marginales de escasos recursos abordaron las calles de Caracas y saquearon gran cantidad de almacenes, en señal de protesta por las medidas del Gobierno. Para la administración Pérez, estos acontecimientos evidenciaron la impopularidad política y social de su programa, y redujeron su capacidad de negociación y de crear el consenso necesario para implementarlo.

Durante el primer año del plan salieron a relucir fenómenos reales. Con la instauración del sistema de cambio libre se

produjo una devaluación del 140 por ciento; la inflación pasó a 81 por ciento; el Producto Territorial Bruto (PTB) cayó en 8.6 por ciento; el desempleo alcanzó el 9.6 por ciento y, con ello, el consumo se redujo en un 12 por ciento. El proceso de privatización no se realizó en un ambiente de libre competencia, sino que prevaleció la participación de los monopolios en el mismo. La corrupción erosionó el sistema financiero con el nombramiento del presidente del Banco Latino, Pedro Tinoco, como presidente del Banco Central. Los criterios con los que manejó el BCV durante su permanencia se orientaron a favorecer los intereses de su grupo; y ello fue antecedente de los sucesos de 1994 en el sector financiero.

A partir 1992 la popularidad del Gobierno presenta un marcado descenso justo cuando la economía empezaba a recuperarse. Si se analiza esta tendencia junto al aumento de la abstención electoral, el descrédito de las instituciones tradicionales del sistema político (partidos, sindicatos, Congreso, aparato de justicia, etc.), y la frecuencia de los actos de protesta, más de 1.500 entre octubre de 1991 y mayo de 1992, encontramos un indicador de la erosión de la cultura política tradicional de acatamiento total a la democracia, y el surgimiento de una nueva cultura política caracterizada por el desencanto frente a las instituciones, que se manifiesta en nuevas formas de participación y posiciones críticas frente al sistema.

En este contexto cobra importancia el papel de las Fuerzas Armadas como actor en la esfera social y política, debido a los acontecimientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992 en los cuales los mandos medios del ejército intentaron tomarse el poder. Como ya se ha analizado, la participación de los

militares en el Gobierno no es extraña para los venezolanos. Desde el fin de la dictadura, las Fuerzas Armadas se comportan, según José Gil, "como un grupo de interés institucional en cuanto ejerce su papel como guardián de la soberanía del país y del orden democrático, pero a la vez de carácter autónomo o privado debido a un fuerte sentimiento de solidaridad hacia el grupo propio y de antagonismos y desconfianza hacia los demás grupos"¹³. Uno de los factores determinantes en la cohesión del sector y en su adhesión al régimen de Gobierno ha sido la profesionalización y el manejo de la situación socio-económica del personal militar. Fueron justamente los mandos medios los que más afectados vieron su nivel de vida desde la década pasada; al interior de este grupo empieza a gestarse un movimiento de rebelión contra el Gobierno, al que acusan de la crisis que en todos los órdenes vive Venezuela hoy en día. Otro factor que creó enorme malestar en la institución castrense fue el favoritismo partidista, que llegaba a determinar los ascensos y la distribución de los cargos administrativos. Las Fuerzas Armadas se mantuvieron siempre cerca de los partidos. Existe en la oficialidad una tradición que, al lado de su homóloga en el Perú, resultan atípicas en el subcontinente.

Por todas estas razones, no resultaba descabellado imaginar que los militares terminarían realizando una manifestación como las que se dieron en 1992. Resulta sorprendente la incapacidad de la clase política para reaccionar frente a los hechos en forma seria y responsable.

¹³ José A. Gil Yepes, "El encaje político en el sector militar. El caso de Venezuela", en *Revista Nueva Sociedad*, Caracas.

Es de notar que en Venezuela, como en otros países, la Iglesia Católica constituye una fuerza moral capaz de señalar el bien y el mal; pero es superficial el sentimiento religioso del pueblo, salvo en los Estados andinos. En ellos nació el COPEI, partido considerado por mucho tiempo de los católicos.

Entretanto, el crecimiento económico de 1992 se mantuvo y se impulsó en forma artificial por medio del gasto y la inversión del Gobierno, política que en 1993 resultó insostenible. En un intento por defender las reservas internacionales, sin tener que pasar por la devaluación, se mantuvo un tipo de cambio poco realista que estimuló la fuga de capitales y elevó las tasas de interés. Al punto de que muchos deudores no pudieron responder por sus obligaciones ante la banca. El comportamiento de los precios del petróleo tampoco favoreció el clima económico: cayeron más de lo previsto. El plan de gastos se frenó, entonces se elevaron los impuestos por decreto; se creó un IVA del 10 por ciento, y otros gravámenes sobre activos empresariales.

Estos acontecimientos multiplicaron la impopularidad del Gobierno y desataron una ola de especulación en los precios, agravada por el hecho de que en Venezuela no existía una cultura fiscal.

En mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decide suspender de sus funciones al presidente Carlos Andrés Pérez, por encontrar mérito suficiente para juzgarlo por malversación de fondos. Pérez habría destinado una partida secreta de 17.000 millones de bolívares para comprar dólares al precio existente bajo el régimen de cambio anterior, y venderlos después cuando el dólar se devaluó, ganándose la diferencia. Para gobernar



durante los meses que restaban de ese período presidencial se designó al escritor y senador de la República Ramón José Velásquez. Su objetivo principal fue el de crear un ambiente propicio para realizar las elecciones de diciembre de 1993, y capotear las dificultades económicas del año.

Así las cosas, se desarrolla una de las campañas electorales más controvertidas de la historia venezolana. Los partidos tradicionales se enfrentan a un enemigo poderoso que no es ya el candidato contrario, sino el desprestigio de los gobiernos que encabezaron, y la corrupción, factores que les restaron credibilidad y respeto frente a la opinión pública.

En esta situación, los medios de comunicación desempeñaron un papel decisivo; en particular la televisión, cuya influencia es determinante sobre la opinión pública venezolana. Día tras día aumentaban las denuncias, noticias e informes sobre actos de corrupción, tensiones internas en los partidos tradicionales, confrontación entre los distintos sectores empresariales por ubicarse con ventaja en el nuevo espacio de economía abierta y de mercado, y la ausencia de un movimiento sindical independiente y preparado para afrontar las realidades socioeconómicas. Así, los medios de comunicación se consolidan también como auténtico grupo de presión, vigilante frente a la conducta del Gobierno y de los dirigentes políticos.

Las circunstancias políticas y económicas del país han intensificado la desagregación de los actores colectivos y la pérdida de las identidades sociales. La caída en los ingresos de los sectores medios ha menguado su papel en la sociedad. Ya no se identifican ellos con un proyecto nacional global, sino que



buscan la realización de su propio proyecto; de allí que sus prácticas colectivas se orienten por intereses puntuales e inmediatos y que hayan perdido horizontes de más largo aliento. Tal vez ese proyecto nacional nunca existió y en su lugar prosperó la identificación de la sociedad venezolana como beneficiaria de recursos petroleros que al agotarse, los dejó sin el piso. El mismo fenómeno se presenta en los estratos bajos: en la clase obrera, en un campesinado cada vez más reducido, y en el segmento creciente de los informales hoy abultado por los inmigrantes.

Por primera vez en la historia democrática de Venezuela, los partidos tradicionales no eran los únicos con posibilidades reales de llegar al poder. A AD lo agobiaba el peso de dos gobiernos cuyas cabezas se encontraban en medio de procesos judiciales por corrupción, y su candidato Claudio Fermín, exalcalde de Caracas, también se vio involucrado en un proceso por malversación de fondos. Entretanto, COPEI también sufría los embates del desprestigio de la clase política. Aunque en principio debió erigirse como primera opción, Rafael Caldera se le cruzó en el camino. Con un discurso que reivindicaba la necesidad de recuperar la confianza en el sistema democrático por encima de la clase corrupta, cuando su partido no respaldó su candidatura, se mostró dispuesto a lanzarse por cuenta propia.

Se formó una alianza multipartidista, *Convergencia*, encabezada por disidentes de COPEI y el MAS, que obraría como el frente político contra el bipartidismo tradicional. Caldera, el último sobreviviente de los tres firmantes de Punto Fijo, encarnaba honestidad y rectitud en su gestión pública;



activo que pocos políticos podían darse el lujo de presentar al electorado, y que le dio favoritismo desde el principio de la campaña electoral. Convergencia agrupó cerca de trece movimientos y partidos de las más diversas tendencias políticas. Lo caracteriza el caudillismo porque su razón de ser se limita a servir de soporte político al gobierno de Caldera. Es poco probable que llegue a consolidarse como partido convencional, por la diversidad misma de sus partes; de eso ellas están conscientes.

Otra de las sorpresas de las elecciones de 1993 fue la participación y acogida de Causa Radical (Causa R), partido de base sindical revolucionaria que participó en la contienda electoral en cabeza de Andrés Velásquez, un sindicalista del acero, dos veces gobernador por elección del Estado Bolívar, donde se encuentran las principales explotaciones de hierro y acero y la hidroeléctrica del Guri, una de las más potentes de América Latina. Aunque carecía de un programa político sólido, la acción de denuncia y su campaña anticorrupción le granjearon adeptos en todo el país, desde las elecciones para gobernadores y alcaldes en 1992.

En medio de rumores según los cuales le habrían robado la victoria a Andrés Velásquez, el expresidente Rafael Caldera resultó vencedor en la contienda electoral con el 30 por ciento de la votación total. Asumió la Presidencia en febrero de 1994 y más que entrar a solucionar los problemas ya existentes, tuvo que encarar otros que no hicieron sino agravar la crisis del país. De lo que se llamó el "chiripero", por la gran cantidad de pequeños partidos que se agruparon para apoyar a Caldera, sólo el MAS y Convergencia (cuyo mayor número de miembros



son antiguos militantes de COPEI) gozan de participación significativa en el gobierno y en el Congreso; en cambio al MIN, al PCV y al MEP no se les ha tenido en cuenta para integrarse al Ejecutivo. Las fuerzas que respaldan a Caldera son minoritarias en un Congreso atomizado, con fuerte presencia de AD y COPEI, y con la oposición de Causa R. En el país surge como caudillo carismático el oficial de blindados Chávez, quien encabezara la sublevación en febrero de 1992.

Caldera se encuentra en problemas, no sólo por las condiciones adversas de la economía, sino también por la dificultad para obtener recursos que le permitan ampliar el margen de maniobra. En marzo presentó un programa de ajuste fiscal cuyos objetivos fueron racionalizar el gasto y aumentar los ingresos fiscales, conocido como el Plan Sosa, inspirado por el ministro de Hacienda del mismo nombre. Para ello, se comprometió primero a practicar austeridad y disciplina en los gastos del Gobierno, y segundo, para incrementar los recursos sustituyó el IVA (que tanto había criticado en su campaña) por otro impuesto aplicable a nivel mayorista, al tiempo que implantó un impuesto a los depósitos bancarios que se aplicaría sólo hasta el 31 de diciembre de 1994. El Plan contemplaba también reformas al Código Tributario para disminuir la evasión; y al impuesto sobre la renta para hacerlo más progresivo, con el objeto de incrementar el recaudo.

Sin embargo, por la misma época se precipita la crisis financiera del Banco Latino, segundo en captaciones, que produjo un efecto multiplicador en el resto del sistema y estuvo a punto de arrasar con siete bancos más. Era la consecuencia de maniobras en el sector financiero, impulsadas desde el mismo

Banco Central e ingeniadas por Tinoco para favorecer los intereses del Grupo Latino, cuya cabeza por muchos años fue él mismo. La manipulación tiene que ver con una inadecuada regulación, control y vigilancia de las instituciones por parte de los organismos encargados. Tras los sucesos de 1992 y la creciente inestabilidad económica y política, las tasas de interés llegan a situarse a niveles del 80 por ciento para evitar una fuga masiva de capitales y una fuerte devaluación.

Por esta razón, grandes cantidades de recursos se desviaron de actividades productivas hacia actividades especulativas. Las instituciones financieras utilizaron esos recursos en la sobreextensión y contratación de la cartera y, sobre todo, en actividades dolosas que incluyeron auto-préstamos. Y fue precisamente lo que se evitó en un principio, la salida masiva de capitales, el factor que aceleró el colapso del sistema financiero, del cual no se repone todavía Venezuela.

Por falta de opciones, el gobierno se vio forzado a aplicar una política de auxilios financieros para rescatar a los depositantes, interviniendo en once bancos y salvando de la quiebra a otros seis. En ello gastó 8.500 millones de dólares, que equivalen al 73 por ciento de todos los depósitos bancarios en 31 de diciembre de 1993, y al 16 por ciento del PTB venezolano¹⁴. Los efectos fueron nefastos: los depositantes cambiaron bolívares por dólares; la cotización de la moneda nacional cayó de 97 bolívares a 220 bolívares por dólar; para evitar una devaluación mayor, hubo que situar la relación cambiaria en 170 bolívares por dólar. La emisión creó un déficit fiscal del 18 por ciento del PTB, y el

¹⁴ Carlos Ball, "La crisis venezolana, milagro al revés", en Periódico *El Tiempo*, Bogotá, noviembre 13 de 1994.

exceso de liquidez empujó el nivel general de precios que provocó una inflación del 70.37 por ciento en el año de 1994.

La inflación acentuó la tendencia en la caída del ingreso real y propició un repunte en la tasa de desempleo, del empleo informal, llegando éste a alcanzar el 50 por ciento de la población económicamente activa con su consecuente impacto social.

En tales circunstancias, el gobierno decide aplicar el Programa de Estabilización y Recuperación Económica (PERE); de modestas metas en principio, parte de reconocer la enfermedad que aqueja a la economía del país. Los objetivos pueden resumirse de la siguiente manera: el crecimiento del PIB empezará a recuperarse desde 1995 con una tasa del 2.8 por ciento; disminuirá la dependencia de los ingresos fiscales en la economía petrolera, lo que tendría sobre todo efectos psicológicos en la población, al pasar de una economía rentista a otra no rentista; la meta de inflación es del 30 por ciento para 1995. Se espera mejorar así las expectativas de los inversionistas privados, cuya participación en la inversión total ha bajado en los últimos años y hoy es vital para la recuperación de la economía venezolana. Reina un escepticismo generalizado sobre la posibilidad de alcanzar estas metas.

Para alcanzar esos objetivos y en vista de la precariedad de su respaldo político, Caldera inició un proceso enderezado a crear el consenso necesario para que el programa pudiera aplicarse con buen éxito. Dialogó con los empresarios agremiados en FEDECAMARAS, con la Confederación de Trabajadores de Venezuela, con los estudiantes, y con los partidos y movimientos políticos. Se discutieron los



instrumentos que se utilizarían para alcanzar las metas propuestas. Reiteró que la principal variable para el manejo del problema sería la fiscal. Se reformaría el sistema financiero para evitar que en lo sucesivo se reincida en las conductas pasadas y se desvíe en su función de intermediación, y para mejorar los niveles de competitividad en la actividad; así mismo, se decidió postergar la apertura del sector financiero a la inversión extranjera, mientras que en los demás sectores de la economía, incluyendo el de la industria petroquímica antes reservada con tanto celo a los nacionales, se asegura la apertura al capital extranjero. Una de las medidas tendientes a fortalecer el sistema financiero es la de mejorar los instrumentos de control y vigilancia, como la Superintendencia de Bancos, incrementando los recursos de estas entidades, tradicionalmente de presupuestos reducidos.

Otros instrumentos son: emitir papeles con tasa de interés LIBOR, más algunos puntos, para enfrentar el exceso de liquidez; acelerar el proceso de privatización para disminuir el peso del Estado en la Economía; permitir la apertura del sector petrolero en áreas que PDVSA y sus filiales no cubran, mediante alianzas y asociaciones estratégicas; desestatizar en parte la Corporación Venezolana de Guayana –gran complejo industrial con viejos problemas– en la cual también se buscan asociaciones estratégicas; mejorar la competitividad y la productividad; reajustar en forma paulatina los precios de la gasolina, que hoy se encuentran por debajo de los costos de producción; allegar un acuerdo para cancelar las prestaciones sociales que el Estado debe a los trabajadores; y aplicar una política de reforma del Estado y de atención a los sectores más pobres de la población, mediante herramientas como la beca alimenticia –bonos–



representativos de cereales y útiles escolares, y dinero en efectivo a través de la red de escolaridad; en Venezuela el 75 por ciento de la población carece de seguridad alimentaria.

Para muchos, este programa presenta ostensibles coincidencias con el Gran Viraje del gobierno anterior. Se llega a afirmar inclusive que sólo le faltaría la “Z” para que fuera PEREZ, apellido del presidente que implantó las tan impopulares medidas neoliberales. Sin embargo, la principal diferencia en la aplicación de los dos planes es precisamente la creación de apoyo de los diferentes sectores. Mientras que CAP implantó su programa con el único respaldo de los tecnócratas que lo inspiraron, Caldera se tomó el trabajo de dialogar con los diferentes grupos de interés; aunque entre sus compatriotas existe la idea de que él termina siempre imponiendo sus criterios en las decisiones finales.

Pero este gesto era indispensable porque, a pesar de la aparente calma que se registraba en la arena política, no se descartaba el peligro de nuevos intentos de golpe de Estado. Menos aún, después de saberse que en 1993 se planearon varias insurrecciones de signos opuestos que al final, por distintos motivos, se frustraban; y de la liberación del teniente coronel Hugo Chávez, gestor de los sucesos del 4 de febrero de 1992, personaje que goza de simpatía entre algunos sectores de la opinión pública venezolana. La corrupción en las filas del ejército y la manipulación de la opinión por la inteligencia militar han sido objeto de denuncia.

En todo caso, el presidente Caldera disfrutó en 1994 de vasta popularidad. Ella se reflejó en el amplio respaldo de la población

a medidas como la suspensión de las garantías constitucionales para impedir la huida de los responsables de la quiebra bancaria, castigar a los especuladores y proceder contra los causantes de la crisis financiera. Caldera también quiso fomentar una reacción de orgullo nacionalista.

Aunque los resultados iniciales del programa a finales de 1994 son poco alentadores, puede afirmarse que eso estaba previsto en los cálculos que sustentan el plan: la economía decreció 3.3 por ciento, la inflación alcanzó 70.3 por ciento al cierre del año y el déficit se situó en 15.4 por ciento, según cifras divulgadas por el Banco Central. Realmente, Venezuela constituye la excepción en el contexto latinoamericano en donde la mayor parte de las economías presentaron crecimiento y bajas tasas de inflación; empezaron a recuperarse de la década perdida de los años ochenta.

En términos demográficos, Venezuela cuenta hoy con cerca de 24 millones de habitantes, con una estructura poblacional joven. La sociedad venezolana de final de siglo es eminentemente urbana, pues el 84.1 por ciento de la población se encuentra en las ciudades del país. El éxodo rural se vio favorecido por las atractivas condiciones de infraestructura y bienestar que ofrecían los centros urbanos fruto de la renta petrolera. Sin embargo, en la actualidad el 40 por ciento de la población vive en condiciones de marginalidad, formando cordones de miseria alrededor de las grandes ciudades. Las crecientes dificultades económicas implican un aumento en el índice delictivo —sobre todo en

menores de edad— y el recrudecimiento de la violencia callejera como forma de protesta colectiva¹⁵.

Definitivamente la población fue la más afectada por el desplome económico. Acostumbrada a la riqueza y la abundancia sin tener que aportar mucho porque el Estado todopoderoso proporcionaba lo necesario para vivir, el golpe mayor es pasar a una nueva etapa en la que el pueblo debe asumir la responsabilidad de su consumo y sus gastos. El disgusto popular crece al ver que cada vez son más pocos los que tienen demasiado. El cambio hacia una nueva sociedad, más participativa en lo económico y en lo político, requiere un proceso que siempre se ha aplazado.

Las grandes expectativas se centran en lo que pueda suceder en 1995 en los ámbitos económico, político y social.

En política, 1995 será un año de actividad febril, por las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales, que se realizarán a finales del año.

Para AD 1994 fue, después de 10 años, su primer año por fuera del poder. No obstante, para muchos analistas políticos lo que realmente sucedió fue un período de cogobierno en el cual AD no hizo más que apoyar las decisiones de la administración Caldera. Esta tendencia podría alterarse sin embargo, y el partido empezaría a asumir una posición más beligerante frente al Gobierno, abocado como está a hacer oposición en el período

¹⁵ "Informe de Venezuela", en Instituto Nacional de Nutrición, Caracas, 1992

electoral. El año pasado el partido inició un proceso de depuración de su imagen, cuya principal manifestación fue la expulsión de CAP, uno de sus más antiguos y prestantes líderes, y de otros dirigentes de la corriente *perecista*. Ello respondió al doble propósito de librarse de la mala imagen que ante la opinión pública dan estos personajes, por un lado, y evitar mayores fracturas al interior del partido, por el otro. Se especula, además, sobre la eventual existencia de candidaturas paralelas a las del partido, ya que la elección de candidatos se hará a dedo¹⁶. El partido se divide entre neoliberales y social-demócratas.

En cuanto a Convergencia Nacional, sus dirigentes harán enormes esfuerzos para sostener la misma coalición de 1993, aunque algunos de sus miembros *menores* alegan que esta actitud no corresponde a la coyuntura electoral, sino más bien a la necesidad de mantener el movimiento unido en torno al gobierno. El MAS, con una dirigencia nueva, está tentado de coligarse con Causa R.

Con tal fin, se han denunciado ofrecimientos burocráticos. En este contexto, de acuerdo con Rafael Núñez, "sería muy difícil mantener esa unidad, puesto que para algunos lo fundamental son las cuotas burocráticas. Para otros, lo que cuenta es el carácter programático del acuerdo y esta es la línea que han mantenido la actual dirección del MEP y el PCV"¹⁷.

Los partidos que mayor oposición han presentado a la administración Caldera son COPEI y Causa R. El primero, al

¹⁶ Periódico *El Nacional*, 27 de diciembre de 1994 p. 1D

¹⁷ Periódico *El Nacional*, Caracas, 28 de diciembre de 1994 p. 1D

igual de AD, tiene problemas de cohesión interna y en el año electoral podrían presentarse divisiones en algunas regiones del país. COPEI también ha cambiado su dirección llevando a su presidencia a Herrera Campins. Causa R, fuerte en algunas regiones del país, intentará probablemente mantener las posiciones alcanzadas en las últimas contiendas electorales, en particular la alcaldía de Caracas. Es este un partido marginado por las demás fuerzas, perseguido, lo que puede resultar contraproducente frente al electorado popular.

En el plano económico, los esfuerzos se dirigirán a controlar las principales variables macroeconómicas, particularmente la inflación, el desempleo, el crecimiento, y el gasto del Gobierno. Frente a ello se abren dos posibles escenarios: uno, en el que el desarrollo del programa iniciado por el Gobierno en 1994 redundaría en una recuperación lenta pero progresiva de la economía venezolana, gracias a la confianza y a la credibilidad con que cuenta el Presidente y que prevalece en los diferentes sectores de la nación; y otro, en el que la continuidad del mismo se vea obstaculizada por fenómenos de carácter económico y aun político, como el empeoramiento de la situación del sector financiero o mayores dificultades para el Presidente en el Congreso, lo que daría la razón a aquellos que opinan que la crisis venezolana aún no toca fondo. El colapso financiero en México puede afectar negativamente a Venezuela al igual que a otros países de la región. Estudios realizados en Caracas contemplan la creación, a ejemplo de la Argentina, de una Caja de Conversión, recomendada por el FMI, que llevaría a la creación y al manejo de una nueva moneda a la par con el dólar.

A largo plazo, Venezuela constituye una de las economías con mejores perspectivas, por su potencial de recursos y por la

riqueza que ellos pueden generar. Terminó 1994 con reservas internacionales de 11.904 millones de dólares y un superávit de su balanza comercial de 8.467 millones de dólares. El control de cambios hizo bajar las importaciones en 30,7 por ciento, mientras las exportaciones (72 por ciento de ellas petroleras) crecieron en 12 por ciento favorecidas por la devaluación.

La clave para que Venezuela consolide su lugar en un contexto internacional y económico relativamente abierto, depende del manejo de esos recursos. Ya cuenta con la amarga experiencia de la frívola utilización de la renta petrolera. En adelante el Estado deberá dirigir el nuevo proceso de industrialización a partir del petróleo y de sus otros recursos, modernizar la prestación de los servicios sociales y ampliar su cobertura, descentralizarse mediante el esparcimiento del poder político.

Recientemente, Venezuela se ha visto asaltada por el narcotráfico. Esta actividad ya puede ser de producción y de consolidación de lo que eran antes simples escalas en rentas internacionales. El narcotráfico, los vínculos que busca con las fuerzas sociales y políticas y con el Estado, opera ya con gran capacidad de corrupción que se notó en el período electoral, tanto en las Fuerzas Armadas, como en los propios partidos. Es un problema que tiende a agravarse.

Dura tarea para un Presidente de 80 años que, aun apoyado por sus hijos, carece de mayoría parlamentaria y se ve enfrentado a una opinión desorientada y a fuertes presiones externas. Es del interés nacional de Colombia no sólo tener un cabal conocimiento de cuanto ocurre en Venezuela, su vecino más

importante, sino también asegurar, en la medida de sus posibilidades y en aras de una política de amistad, la recuperación y la estabilidad de Venezuela. En las dificultades es cuando se conocen y aprecian los verdaderos amigos.

INDICADORES DE LA ECONOMIA VENEZOLANA

	1991	1992	1993	1994*	1995**
Crecimiento porcentual del PIB	10,4	6,8	-0,4	-3,3	-1,0
Balanza en cuenta corriente (miles de millones de US\$)	1.633	-3.727	-1.800	1.000	1.000
Reservas internacionales netas	10.666	9.562	9.200	6.200	6.200
Deuda externa total	34.438	36.841	38.900	39.000	39.000
Deuda externa como porcentaje de los ingresos por exportaciones	187,3	217,6	228,4	234,2	204,9
Deuda externa como porcentaje del PIB	65,0	59,0	64,2	68,6	60,6
Tasa de cambio a fin de año	61,63	79,6	106,2	170	235

CEPAL, Editorial C.A. 1997

WORLD BANK, World Development Indicators, Washington, D.C., 1997

* Preliminares

** Proyecciones del Chemical Bank

Sosa, Marta. "Venezuela, cambios, elecciones y balas", en *Informe de Coyuntura y Política Económica Venezolana*, Caracas, enero de 1993.

Sonntag, Heinz. "Venezuela, ¿crisis de liderazgo o crisis de democracia?", en *Informe de Coyuntura y Política Económica*, Caracas, enero de 1993.

"Otra vez las vacas flacas", en *Carta Financiera*, Bogotá, octubre de 1993.

"Incertidumbre venezolana", en *Carta Financiera*, Bogotá, febrero de 1994.

"Venezuela surrealista", en *Carta Financiera*, Bogotá, mayo de 1994.

"La crisis cambiaria venezolana", en *Carta Financiera*, Bogotá, julio de 1994.

"De debacle en debacle", en *Semana*, Bogotá, 8 de marzo de 1994.

"Con la soga al cuello", en *Semana*, Informe Especial, Bogotá, 24 de mayo de 1994.

PRENSA:

Sandoval, Werther. "Contracción de liquidez wdesataría cuarta ola de crisis financiera", en *El Nacional*, Caracas, 27 de noviembre de 1994.

Uslar Pietri, Arturo. "Un país devorado por el Estado", en *El Nacional*, Caracas, 4 de diciembre de 1994.

Zavatti, Elvis. "Una vez al año, pero todos los años", en *El Nacional*, Caracas, 20 de noviembre de 1994.

"CTV exigirá al gobierno aumentar el salario mínimo a 25.000 dólares", en *El Nacional*, Caracas, 27 de octubre de 1994.

"Aplazado indefinidamente el aumento de la gasolina", en *El Nacional*, Caracas, 20 de noviembre de 1994.

"El Plan Corrales se mordería la cola", en *El Nacional*, Caracas, 27 de noviembre de 1994.

"Sombrío panorama de Venezuela si no cede a las fuerzas del mercado", Informe de Bussines Latin America en *El Nacional*, Caracas, 28 de noviembre de 1994.

"Del ahorro nacional a las participaciones en dólares", en *El Nacional*, Caracas, 4 de diciembre de 1994.

"La política económica de Caldera depende de la opinión pública", Análisis del Chemical Bank en *El Nacional*, Caracas, 20 de diciembre de 1994.

"Caldera, la última esperanza", en *El Tiempo*, Bogotá, 6 de febrero de 1994.

"Venezuela da garantías a inversionistas extranjeros", en *El Tiempo*, Bogotá, 24 de agosto de 1994.

"Banqueros protestan por regulación de intereses", en *El Tiempo*, Bogotá, 3 de octubre de 1994.

"Caracas aprueba el presupuesto para 1995", en *El Tiempo*, Bogotá, 17 de noviembre de 1994.

"Venezuela gastará más en 1995", en *El Tiempo*, Bogotá, 27 de noviembre de 1994.

Director de la Investigación:
Pierre Gilhodes

Investigadores:
Juan Carlos González
Profesor de la Facultad de Ciencias,
Gobierno y Relaciones Internacionales de la
Universidad Externado de Colombia y
Investigador del Centro de Investigaciones y
Vinculos Regionales

Cooperadores:
Natalia Ramírez
Marta Camila Lobo-Guerrero
Claudia Álvarez
Docentes de la Facultad de Ciencias,
Gobierno y Relaciones Internacionales de la
Universidad Externado de Colombia